LA SUBLEVACION DE JULIO DE 1936 Y LA ACTUACION DE LOS TRIBUNALES POPULARES EN ALBACETE

Francisco Sevillano Calero
Universidad de Alicante

I. INTRODUCCION

El fracaso final de la II República en la provincia de Albacete, al igual que sucedió en el resto del país, se debió principalmente a las resistencias de un sector de la sociedad, encabezado por la vieja oligarquía política, al cambio preconizado por el reformismo republicano¹. A comienzos de los años treinta, la estructura social en Albacete era eminentemente rural en consonancia con su carácter agrícola tradicional y latifundista, lo que, junto a la débil urbanización y los altos índices de analfabetismo, ayuda a explicar el predominio de la derecha en la vida política de esta provincia durante la República². La pervivencia de una sociedad civil fragmentada y del localismo clientelista determinaron que, tras las elecciones municipales de abril de 1931, los candidatos monárquicos lograran restaurar sus redes caciquiles y conservar el control de sus respectivos distritos, si bien muchos de estos caciques locales acabaron por pasarse al republicanismo a tenor del ambiente político general en el resto del país, a lo que siguió un avance del centro radical y, a partir de 1933, de la derecha representada por Acción Popular, en la mayoría de los municipios de la provincia, sobre todo en los partidos judiciales de Alcaraz, Yeste, Chinchilla y La Roda.

Sin embargo, durante estos años la tensión social en el campo albaceteño fue en aumento como consecuencia de la mayor concienciación del campesinado a partir de los desequilibrios en la estructura de la propiedad, la desfavorable coyuntura económica en los años treinta y la creciente insatisfacción por el fracaso en la provincia de la política agraria diseñada por el reformismo republicano, como mues-

---

¹ Un sugestivo análisis general sobre el tema puede verse en JULIA, S.: "El fracaso de la República", en *Revista de Occidente*, nº 7-8 (Noviembre 1981), pp. 196-211. Para una visión global de la trayectoria histórica de Albacete durante el primer tercio del siglo XX, véase REQUENA GALLEGO, M.: "Albacete en el período 1900-1936", en *Historia de Albacete 1833-1985 y su Caja de Ahorros*. Albacete, 1985, pp. 142-186.

² Sobre el comportamiento político y la clase dirigente en Albacete durante los primeros años de la República, véase REQUENA GALLEGO, M.: *Partidos, elecciones y élite política en la provincia de Albacete 1931-1933*. Albacete, 1991. Para la dinámica electoral en la provincia a lo largo de todo el período republicano, puede verse SANCHEZ SANCHEZ, J. y MATEOS RODRIGUEZ, M.: *Elecciones y partidos en Albacete durante la Segunda República, 1931-1936*. Albacete, 1977 y REQUENA GALLEGO, M.: "Las elecciones del Frente Popular en Albacete", en *Al-Basit*, nº 11 (diciembre 1982), pp. 27-72.

tran el incremento de los afiliados y la expansión de las organizaciones ugetistas³.

Por otra parte, a lo largo del primer tercio del siglo XX se produjo en Albacete una débil industrialización que afectó principalmente a aquellas poblaciones que jalonan el eje de comunicaciones entre el centro y el sureste peninsular que por carretera y ferrocarril recorre la provincia de NO a SE. Tales municipios, sobre todo la capital y Almansa, fueron los más beneficiados por el crecimiento económico, concentrando a las clases medias y el proletariado industrial de la provincia, al tiempo que experimentaron un continuo avance de las fuerzas políticas de izquierda, siendo el PSOE el único partido obrero con una amplia implantación.

Esta progresiva movilización política, unida al impacto y las secuelas de la crisis económica, produjo una creciente conflictividad social en Albacete durante la República⁴, como demuestran el aumento hasta 1933 del débil movimiento huelguístico provincial, los sucesos ocurridos en Villarrobledo y Tarazona de la Mancha durante la revolución de octubre de 1934⁵ y la ruptura social que siguió al triunfo del Frente Popular en la provincia tras las elecciones legislativas de febrero de 1936, si bien la derecha había conseguido el mayor número de votos, destacando los sucesos de Yeste en el mes de mayo⁶.

Fue en esta situación caracterizada por la pérdida del poder a nivel provincial y municipal por parte de la derecha tras las elecciones de febrero de 1936, a lo que siguió la formación de comisiones gestoras integradas por republicanos y socialistas en aquellos municipios depurados después de los sucesos de 1934, entre ellos el de Albacete capital y los principales municipios de la provincia; la aceleración de las medidas reformistas por las nuevas autoridades del Frente Popular; y la violencia política, cuando un sector de la sociedad albaceteña, principalmente la vieja oligarquía terrateniente, apoyada por una parte de las clases medias, decidió, como ocurría en el resto del país, secundar a los militares en su pretensión de tomar el poder por la fuerza.

Tras el fracaso relativo del golpe de Estado, la España republicana que siguió al 18 de julio de 1936 poco tenía que ver con el inicial proyecto republicano de 1931. A pesar del formal mantenimiento del orden constitucional, el régimen parlamentario

---

³ La cuestión agraria en la provincia de Albacete durante la II República puede verse en GOMEZ HERRAEZ, J.M.: *Voces del campo y ecos en la prensa. Problemas agrarios en Albacete durante la Segunda República*. Albacete, 1988.

⁴ Acerca de la violencia política en España, véase AROSTEGUI, J. (ed.): "Violencia y política en España", nº 13 de *Ayer*, Madrid, 1994 y AROSTEGUI, J.: "Conflictividad social e ideología de la violencia, 1917-1936", en *España, 1898-1936: Estructuras y cambio*. Madrid, Universidad Complutense, 1984, pp. 309-343. Asimismo, referidos a los años treinta pueden verse distintos estudios sobre esta cuestión en GONZALEZ CALLEJA, E.: "El fracaso de la milicias políticas", en nº 1 de *La Guerra Civil*. Madrid, Historia 16, 1986, pp. 72-86; PAYNE, S.G.: "Political violence during the Spanish Second Republic", en *Journal of Contemporary History*, vol. 25 (1990), pp. 269-288 y CIBRIAN, R.: "Violencia política y crisis democrática: España en 1936", en *Revista de Estudios Políticos*, Madrid, nueva época, nº 6 (1978), pp. 81-116.

⁵ Véase CARRION INIGUEZ, J.D.: *La insurrección de octubre de 1934 en la provincia de Albacete*. Albacete, 1991.

⁶ Véase REQUENA GALLEGO, M.: *Los sucesos de Yeste (mayo 1936)*. Albacete, 1983.

y el proyecto reformista de sus sostenedores fueron eliminados al principio de la guerra por el estallido de un conato de subversión social que iba más allá del orden democrático y que no llegó a consolidarse por el triunfo final del proyecto políticosocial defendido por el PCE y las fuerzas afines, con el apoyo de la pequeña burguesía, y que si bien se consideraba como una vuelta al régimen parlamentario de preguerra, en realidad significaba la imposición en el bando republicano de una fuerza política hegemónica y de unos intereses sociales concretos.

En este contexto de guerra civil y luchas políticas intestinas, la Justicia Popular en la zona republicana estuvo condicionada por la reorganización del Estado tras la quiebra que sufrió como consecuencia de la rebelión militar y la subsiguiente reacción revolucionaria, y cuyo fundamento era ahora una alianza entre partidos y sindicatos de izquierda, de forma que la nueva justicia aparece como un elemento más de dicha reorganización.

Asimismo, la Justicia Popular también quedaba matizada por la situación de guerra, con la necesidad de derrotar al enemigo en el frente y reprimirlo, como era el caso de Albacete, en la retaguardia. Tales hechos determinaron que bajo la legalidad que representaba el Estado republicano reconstruido se ejerciera una represión más selectiva que verdaderamente eliminara al enemigo y a quien potencialmente pudiera serlo, al tiempo que se ponía fin a aquella otra represión que durante los primeros meses de guerra había sido ejercida al margen del poder legal y que tanto daño había hecho a la imagen de la República.

II. LA SUBLEVACION DE JULIO DE 1936 EN ALBACETE

1. Conspiración y rebelión en la provincia

La provincia de Albacete estaba integrada en la III División Orgánica, cuya Capitanía General se hallaba en Valencia, contando con una escasa guarnición, compuesta principalmente por tres compañías de la Guardia Civil, con cabeceras en la capital, Almansa y Hellín, además de una compañía de Guardias de Asalto y un destacamento de Guardias de Seguridad. La conspiración en la provincia⁷ estuvo dirigida por el Teniente Coronel de la Guardia Civil Fernando Chápoli Ausó, el Comandante del mismo cuerpo Angel Molina Galano y Alfonso Cirujeda, Capitán de la Guardia de Asalto que había sido destituido por las autoridades del Frente Popular, aunque continuó en Albacete, trasladándose frecuentemente a Madrid para recibir instrucciones sobre la rebelión. El plan consistía en concentrar parte de la Guardia Civil en la capital, Almansa, Hellín, Villarrobledo y Alcaraz, mientras que

---

⁷ Para una visión general de la conspiración y la rebelión contra la República, véase AROSTEGUI, J. y otros: "La conspiración contra la República", nº 3 de *La Guerra Civil*. Madrid, Historia 16, 1986 y CARDONA, G. y otros: "El 18 de Julio. La sublevación paso a paso", nº 4 de *La Guerra Civil*. Madrid, Historia 16, 1986. Una primera aportación al conocimiento de la sublevación en Albacete fue la de FUSTER, F.: "Albacete en los libros de la guerra civil española", en *Al-Basit*, nº 0 (agosto 1975), pp. 12-24.

en el resto de la provincia sólo habrían efectivos del mismo cuerpo en Nerpio, aunque luego se concentraron en Yeste.

Por su parte, el jefe provincial de FE y de las JONS, Fulgencio Lozano Navarro, mantuvo contactos con el Comandante Molina y el Capitán Cirujeda para participar en la insurrección, al igual que Acción Popular, el Partido Agrario y Renovación Española⁸.

En líneas generales, los objetivos que perseguían los conspiradores eran apoderarse de la capital y de los principales pueblos en las rutas por ferrocarril y carretera entre Madrid y las provincias levantinas para controlar dichas comunicaciones. Asimismo, el dominio de este eje que de NO a SE cruzaba la provincia significaba imponerse en la parte más importante de la misma, mientras que la concentración de efectivos en Alcaraz y Yeste perseguía controlar las comarcas del SO.

En mayo, los conspiradores albaceteños comunicaron a los de Valencia su intención de sublevarse⁹. Tras el asesinato de Calvo Sotelo, el 14 de julio celebraron por la tarde una reunión en el antiguo Cuartel de la Guardia Civil de la capital, en la que, ante la falta de munición, proyectaron unos ejercicios de tiro, pretexto bajo el que podrían solicitarla. Por su parte, las autoridades provinciales intentaban frenar la situación deteniendo a una serie de militantes de FE y de las JONS, ante lo que el Teniente Coronel Chápuli regresó a Albacete de su visita de inspección por los pueblos de la provincia, suspendiendo seguidamente la concentración de efectivos de la Guardia Civil para evitar mayores sospechas¹⁰.

Tras tener conocimiento en la madrugada del sábado 18 de julio de la rebelión militar en Marruecos, el Teniente Coronel Chápuli movilizó de nuevo a la Guardia Civil, al tiempo que el Comandante Molina comunicaba a FE y de las JONS y otras formaciones derechistas que movilizaran a sus simpatizantes y los enviasen al Cuartel de la Guardia Civil para ser armados; mientras, Cirujeda marchó a Madrid para conocer mejor lo que estaba sucediendo¹¹. Entre los rebeldes, se hallaba el Comandante Militar de la plaza, Teniente Coronel de Infantería Enrique Martínez Moreno, que presidió la Junta Militar que se constituyó¹².

Ante esta situación, el Gobernador Civil de Albacete, Manuel Pomares Monleón, junto al que se encontraban los dirigentes provinciales del Frente Popular, se mantuvo en contacto con las autoridades centrales en Madrid. Aquella misma mañana del día 18, el Alcalde de la ciudad, Virgilio Martínez Gutiérrez, se dirigió al Gobierno Civil, desde donde habló públicamente junto al Gobernador para reafirmar su apoyo a la República¹³.

A la mañana siguiente, el Comandante Militar Martínez Moreno declaró el estado

---

⁸ ARRARAS, J.: *Historia de la Cruzada Española*. Madrid, 1939-1943, vol. V, p. 560.

⁹ Archivo Histórico Nacional (A.H.N.), Causa General de Albacete, Pieza 2ª, leg. 1016/1, fol. 13.

¹⁰ ARRARAS, J., *op. cit.*, pp. 560-562.

¹¹ *Ib.*, p. 562.

¹² A.H.N., Causa General de Albacete, Pieza 2ª, leg. 1016/1, fols. 13 y 17.

¹³ ARRARAS, J., *op. cit.*, pp. 562-563.

de guerra en la provincia, mientras que efectivos de la Guardia Civil, secundados por paisanos, ocuparon los puntos estratégicos de la ciudad, la Casa del Pueblo y otros centros de las fuerzas republicanas, y el Gobierno Civil, siendo detenido el Gobernador junto a algunos dirigentes del Frente Popular, al tiempo que los guardias de asalto y los de seguridad se unían a los rebeldes¹⁴. El Comandante Valerio Camino Peral se hizo cargo del Gobierno Civil, procediendo a disolver los ayuntamientos frentepopulistas de la provincia y a adoptar medidas de cara a mantener el orden público y realizar las detenciones oportunas¹⁵. Por la tarde, fueron ocupados el Ayuntamiento, que finalmente pasó a dirigir el mismo Comandante Camino, y la Diputación Provincial, a cuyo frente estuvo Juan Poveda Garvía, vicepresidente provincial de Acción Popular¹⁶. Durante la noche, el General Pozas, Inspector General de la Guardia Civil, y el Gobernador Civil de Alicante se pusieron en contacto con el Teniente Coronel Chápuli, pidiéndole explicaciones por la declaración del estado de guerra y exigiéndole la puesta en libertad del Gobernador depuesto¹⁷.

Por lo que respecta a la sublevación en el resto de la provincia, los cabecillas militares que se habían sublevado en la capital fueron nombrando "delegados gubernativos" para aquellos pueblos que se unían a su actitud, ocupándose directamente de las alcaldías o nombrando a quienes habían de detentarlas en adelante¹⁸.

A partir del domingo 19 de julio, en Almansa, Hellín, La Gineta, La Roda, Villarrobledo y Yeste miembros de la Guardia Civil, reforzados con efectivos de otros puestos, así como por falangistas y otros particulares, procedieron a declarar el estado de guerra en estas localidades, haciéndose cargo del gobierno municipal y clausurando los centros de las distintas formaciones izquierdistas, al tiempo que detenían a algunos de sus dirigentes¹⁹.

Asimismo, en distintos pueblos de la provincia, tales como Alborea, Golosalvo, Madrigueras, Fuente-Alamo, Agramón, Liétor y Peñas de San Pedro, grupos de civiles, con un destacado papel de miembros locales de la Falange, se sumaron a la rebelión junto a los efectivos de la Guardia Civil²⁰. A su vez, numerosos particulares de otras localidades (Abengibre, Balazote, Elche de la Sierra, Jorquera, Mahora, etc.) se dirigieron a la capital en apoyo de los sublevados después de que fuera declarado el estado de guerra²¹.

A partir de este momento, los sucesos ocurridos en la provincia de Albacete constituyeron un episodio más de la "guerra de columnas" que siguió al relativo

---

¹⁴ *Ib.*, pp. 563-564.

¹⁵ A.H.N., Causa General de Albacete, Pieza 2ª, leg. 1016/1, fol. 17.

¹⁶ ARRARAS, J., *op. cit.*, p. 564.

¹⁷ A.H.N., Causa General de Albacete, Pieza 2ª, leg. 1016/1, fol. 13.

¹⁸ A.H.N., Causa General de Albacete, leg. 1014/2, sentencias diversas referentes a Bazalote, La Gineta, Alborea y Liétor.

¹⁹ ARRARAS, J., *op. cit.*, pp. 567, 570-571 y 596-600. Véase, igualmente, A.H.N., Causa General de Albacete, legs. 1014/2 (diversas sentencias) y 1016/1, fol. 86.

²⁰ A.H.N., Causa General de Albacete, leg. 1014/2, diversas sentencias.

²¹ A.H.N., Causa General de Albacete, Pieza 2ª, leg. 1016/1, fols. 19-88 (*passim*).

fracaso de la sublevación militar en el país. El lunes 20 de julio, se produjo una huelga general en Albacete capital, mientras que, una vez consolidadas aquí sus posiciones, los rebeldes procedieron a enviar pequeñas columnas reforzadas por milicias a los pueblos de la provincia donde se habían encontrado resistencia, como fue el caso de Minaya y Mahora, mientras que una primera columna que partió de Albacete para intentar unirse a los rebeldes en Almansa hubo de regresar ante la presencia en esta última población de guardias civiles y paisanos procedentes de Alicante, Alcoy, Villena, Elda, Sax y Yecla, a cuyo frente se encontraba el diputado de Izquierda Republicana Vicente Sol. Al día siguiente, una segunda columna rebelde al mando del Comandante Molina llegó a Almansa desde Albacete, pero ante lo irreversible de la situación emprendió el regreso a la capital. Poco después, llegaron a Almansa soldados de infantería de Alicante mandados por el Comandante de Estado Mayor Sintes Pellicer, quien ante las presiones del diputado Vicente Sol hubo de desistir de su inicial propósito de pasarse a los rebeldes, aunque después de conseguir la rendición del Capitán de la Guardia Civil Isaac Martínez, que se había sublevado en esta localidad, se negó a marchar contra Albacete. El miércoles día 23, llegaron a Almansa nuevas fuerzas desde Alicante al mando del Comandante de Estado Mayor Enrique Gillis y el Teniente Emeterio Jarillo Orgaz, a lo que siguió el regreso en tren hacia la capital levantina de Sintes Pellicer con los detenidos²².

En Hellín, donde se había sublevado el Capitán de la Guardia Civil de este puesto, Serena Enamorado, las fuerzas rebeldes quedaron acuarteladas el día 21 ante el cariz que estaban tomando los acontecimientos, con la inminente caída de Almansa y la amenaza que representaba el avance por tren de fuerzas leales, al mando del Comandante José Balibrea Vera, procedentes de Cartagena y Murcia, destacando la presencia de los diputados socialistas Melchor Guerrero y Muñoz Zafra. Al día siguiente, tras ser bombardeado el Cuartel, Serena accedió a entregarse al Comandante de Artillería José Verdonces Martialaz, quien lo conduciría a Murcia en calidad de prisionero, si bien ambos habían acordado unirse a los rebeldes en Albacete. Poco después de la salida de Verdonces, llegó a Hellín, procedente de Almansa, el Comandante Molina, que consiguió la adhesión de una parte de las fuerzas murcianas, regresando seguidamente a Albacete. El jueves día 23, el resto de los efectivos de Murcia y Cartagena entraron en Hellín, siendo enviados nuevos refuerzos²³.

En la madrugada del día 24, se agruparon en las proximidades de Chinchilla las fuerzas murcianas y alicantinas, llegando asimismo más milicianos desde Valencia; inmediatamente, partieron hacia Albacete, siendo escoltados por siete aviones de la base de Los Alcázares, en Murcia, que bombardearon la capital. A la mañana siguiente, tras un nuevo bombardeo aéreo y artillero, y una vez que la situación era insostenible, los rebeldes se retiraron hacia el Cuartel de la Guardia Civil, donde el Teniente Coronel Chápuli se suicidó, mientras que poco después fue asesinado el Comandante Militar Martínez Moreno. A primeras horas de la tarde, los insurrectos

---

²² ARRARAS, J., *op. cit.*, pp. 565-569 y 573.

²³ *Ib.*, pp. 571-572.

que todavía quedaban en el Cuartel se rindieron, siendo trasladados los prisioneros a Alicante el domingo día 26²⁴.

Tras reducir a los rebeldes en la capital, grupos de soldados, carabineros y milicianos se dirigieron a distintos puntos de la provincia para acabar con la insurrección²⁵. Por su parte, la ocupación de Villarobledo fue llevada a cabo por guardias civiles y milicianos procedentes de Socuéllamos (Ciudad Real)²⁶.

Acerca de las causas del fracaso final de la rebelión militar de julio de 1936 en la provincia de Albacete, F. Fuster señala el peso de los factores estratégicos, ya que, por un lado, Albacete estuvo rodeada de otras provincias en las que no triunfó la sublevación, con lo que quedó aislada y privada de ayuda inminente, al tiempo que la provincia poseía un carácter estratégico al dominar las comunicaciones por ferrocarril y carretera entre Madrid y las provincias levantinas²⁷.

A ello habría que añadir unas razones de índole políticosocial, ya que la insurrección tenía que triunfar en las zonas de la provincia más desarrolladas económicamente y con mayor presencia de las clases medias, una parte de las cuales quedó con la República, y el escaso proletariado industrial. Por consiguiente, los rebeldes habían de imponerse en la zona que les era más hostil por el apoyo social y la fuerza política de los que gozaba la izquierda, lo que en los días de la sublevación se tradujo en la celebración de huelgas en Albacete y Almansa y la movilización de particulares en estas mismas ciudades, además de en Pozo-Cañada, Ontur, Montealegre, Hellín, La Gineta, La Roda y Minaya, mientras que el resto de la provincia quedó a la expectativa de los acontecimientos²⁸, si bien lo verdaderamente decisivo fue el envío de efectivos desde Alicante, Murcia y Ciudad Real.

2. Sociología de los rebeldes

Este análisis hace referencia al componente civil de la rebelión militar, que, como ya ha sido señalado, desempeñó un papel cooperante. Se trata de un total de 453 encausados por los delitos de rebelión, auxilio a la misma y excitación en el Tribunal Popular Especial de Albacete²⁹.

La práctica totalidad de los individuos juzgados fueron hombres, con tan sólo cinco mujeres. En cuanto a la edad, se trataba mayoritariamente (85%) de adultos comprendidos entre los 20 y los 59 años de edad, siendo más numerosos (53%) los adultos jóvenes de 20 a 39 años.

Respecto a los lugares de procedencia, sobresalen las poblaciones de la provincia

---

²⁴ *Ib.*, pp. 572-579.

²⁵ *Ib.*, pp. 597-598 por lo que se refiere a La Gineta y La Roda; para otros pueblos, véase A.H.N., Causa General de Albacete, Pieza 2ª, leg. 1016/1, fols. 19-88.

²⁶ ARRARAS, J., *op. cit.*, pp. 600-601.

²⁷ FUSTER, F., *op. cit.*, p. 18.

²⁸ Véase el comportamiento de los pueblos de los partidos judiciales de Casas Ibáñez y Yeste en A.H.N., Causa General de Albacete, Pieza 2ª, leg. 1016/1.

²⁹ A.H.N., Causa General de Albacete, leg. 1014.

más populosas y que mayor protagonismo tuvieron durante la sublevación de julio de 1936, aglutinando al 86% de los encausados: Albacete, Hellín, La Gineta, La Roda, Villarrobledo, Minaya y Yeste.

Más interesante es su composición social, con una primera aproximación al mismo a través de la ocupación profesional de los encausados. Sobresale el predominio, con el 48,8%, del sector servicios, que queda muy por encima de los sectores primario (26,8%) y secundario (16,8%), de forma que si a la clase dominante tradicional (principalmente los propietarios de grandes fincas agrarias y los industriales al frente de fábricas modernas), que representan el 6,5%, se le unen los miembros de la pequeña burguesía agraria y urbana (labradores o cultivadores directos de sus pequeñas y medianas explotaciones, los artesanos de los pequeños talleres familiares, funcionarios, profesionales liberales y comerciantes sobre todo) resulta que las clases media y alta, minoritarias en el conjunto de la sociedad albaceteña de los años treinta, constituyeron aproximadamente el 65% de quienes se rebelaron contra la República³⁰, mientras que la clase trabajadora (fundamentalmente jornaleros, obreros y dependientes y empleados) representa casi el 30%.

CUADRO I
Ocupación profesional de los encausados por rebelión militar
en el Tribunal Especial Popular de Albacete

PROFESION	NUMERO	% DEL TOTAL
Jornaleros	44	10,5
Labradores	54	12,9
Propietarios agrarios	13	3,1
Pastores	1	0,2
Sector I	112	26,7
Albañiles	13	3,1
Artesanos	40	9,5
Obreros	3	0,7
Industriales	14	3,4
Sector II	70	16,7
Transportistas	14	3,3
Comerciantes	38	9,1
Posaderos	2	0,5
Dependientes/empleados	52	12,4
Funcionarios	47	11,2
Servicios particulares	10	2,4
Profesiones liberales	41	9,8
Sector III	204	48,7
Sus labores	4	1
Estudiantes	28	6,7
Jubilado	1	0,2
Inactivos	33	7,9
TOTAL	419	100

Fuente: A.H.N., Causa General de Albacete, legs. 1010-1014/1. Elaboración propia.

³⁰ A conclusiones similares acerca de la composición social de los rebeldes se llega en el estudio de G. Sánchez Recio sobre la sublevación en Alicante ("La trama de la rebelión en Alicante", en *Guerra Civil y Franquismo en Alicante*. Alicante, 1990, pp. 41-46).

No resta más que una breve mención de su procedencia política, con un destacadísimo predominio de los afiliados a FE y de las JONS (muchos de ellos procedentes de la CEDA), estando presentes también militantes de Acción Popular, el Partido Agrario y Renovación Española.

III. ALBACETE EN GUERRA: LOS TRIBUNALES POPULARES

1. Justicia Popular, reorganización del poder y represión

Paralelamente a la reorganización y fortalecimiento del Estado en la zona republicana, fueron apareciendo distintos decretos que, por un lado, pretendían garantizar el orden público en la retaguardia y, por otro, daban nacimiento y consolidaban la Justicia Popular³¹. Por el decreto del 23 de agosto de 1936, el gobierno republicano de Giral creaba un tribunal especial en Madrid, al tiempo que por otro del día 25 extendía una "justicia especial y de excepción" al resto del territorio controlado por la República. El *Tribunal Especial Popular* de Albacete comenzó sus actuaciones en septiembre de 1936, perviviendo hasta febrero de 1939. Un nuevo decreto del 10 de octubre de ese año establecía, a iniciativa del primer gobierno de concentración de Largo Caballero, los *Jurados de Urgencia*, cuya labor en Albacete duró de noviembre de 1936 a abril de 1938, mientras que por otro decreto del día 17 del mismo mes se creaban los *Jurados de Guardia*, cuya actuación quedó limitada a Madrid y Barcelona.

El siguiente paso en la organización de la Justicia Popular fue su "normalización", iniciándose bajo el nuevo gobierno de concentración, ahora con participación también anarquista, de Largo Caballero. Mediante el decreto del 23 de febrero de 1937 se precisaban las competencias de los distintos tribunales creados, destacando la ampliación de las competencias de los Tribunales Especiales Populares a los delitos comunes. Por otro decreto del 7 de mayo del mismo año, los ya calificados como "tribunales populares" fueron integrados en las audiencias.

La última etapa se inició con la formación del primer gobierno de Negrín en mayo de 1937 y significó un progresivo debilitamiento de los tribunales populares en beneficio de una vuelta a la normalidad judicial, al tiempo que se creaban otros tribunales que no pertenecían propiamente a la Justicia Popular. Dos nuevos decretos del 6 de agosto de 1937 y el 24 de marzo de 1938 completaban la integración de los tribunales populares en las audiencias, mientras que el último de estos decretos

---

³¹ Véase ALEJANDRE, J.A.: *La Justicia popular en España*. Madrid, 1981; SANCHEZ RECIO, G.: "La Justicia popular durante la Guerra Civil", en *Arbor*, CXXV, nº 491-492 (nov.-dic. 1986), pp. 153-180; id.: "La Justicia ordinaria y la Justicia popular durante la Guerra Civil", en *Justicia en Guerra*. Madrid, 1990, pp. 87-108; id.: *Justicia y Guerra en España: los tribunales populares (1936-1939)*. Alicante, 1991; id.: *La República contra los rebeldes y los desafectos. La represión económica durante la guerra civil*. Alicante, 1991.

también suprimía los Jurados de Urgencia y los de Guardia. Finalmente, se crearon dos nuevos tribunales, los *Tribunales Especiales de Espionaje y Alta Traición* y los *Tribunales Especiales de Guardia*, el 22 de junio y el 29 de noviembre de 1937.

En general, el carácter represivo de la nueva justicia queda confirmado por los siguientes hechos³²:

1) La depuración de los funcionarios judiciales antes de la aparición de la Justicia Popular, procurándose en adelante que quienes desempeñaran tales puestos fueran leales a la República. Los ceses fueron llevados a cabo por las autoridades del Frente Popular en los días inmediatamente posteriores a la rebelión, actuaciones que luego sancionó el gobierno central mediante los decretos del 21 de julio y el 21 de agosto de 1936, al tiempo que por otro decreto del 25 de agosto creaba juntas depuradoras del personal judicial, apareciendo en Albacete el 9 de octubre de 1936³³.

2) Los procedimientos, con una justicia sumarísima³⁴; la búsqueda en el proceso sumarial de la afiliación política y de aquellos hechos que indicaran la existencia de relaciones del encausado con la derecha a través del informe políticosocial emitido por los comités del Frente Popular, la policía gubernativa o los ayuntamientos; la presencia de los partidos del Frente Popular y los sindicatos de izquierda entre los jueces legos; y la amplitud de competencias de éstos.

3) Los delitos juzgados, ya que, además de los de rebelión militar enjuiciados por los Tribunales Especiales Populares (más tarde también se encargarían de los delitos comunes), los Jurados de Urgencia castigaban aquellos hechos que, pudiendo significar hostilidad o desafección al régimen, no estuvieran tipificados como delitos; los Jurados de Guardia se encargaban de una serie de delitos, en su mayoría contra la seguridad interior del Estado, que, sin embargo, se consideraban como auxilio y adhesión a la rebelión; y los Tribunales Especiales de Guardia juzgaron los delitos de espionaje, alta traición, derrotismo y subsistencias. En general, se trataba de delitos políticos y de guerra mediante cuya persecución y castigo se pretendía

---

³² Para estos y otros aspectos referidos a la provincia de Albacete, véase una primera aproximación en SEVILLANO CALERO, F.: "La Justicia Popular en la provincia de Albacete durante la Guerra Civil: una forma de represión", en *España Franquista. Causa General y Actitudes Sociales ante la Dictadura*, dir. por I. Sánchez, M. Ortiz y D. Ruiz, Cuenca, 1993, pp. 79-85. Una exposición de la *Causa General* de Albacete, fuente documental que ha sido básica para la realización de este estudio, puede verse en ORTIZ HERAS, M.: "Las posibilidades de la Causa General como fuente para proyectos de investigación", en *ib.*, pp. 29-62.

³³ SANCHEZ RECIO, G.: "Depuración y reforma de la administración de la justicia en la provincia de Alicante durante la Guerra Civil", en *Anales de la Universidad de Alicante. Historia Contemporánea*, nº 6 (1987-1988), pp. 127-144. Para el caso de Albacete, véase A.H.N., Causa General de Albacete, leg. 1022/2, fols. 2-3.

³⁴ Característica esencial de la Justicia Popular, en Albacete la duración de los procesos solían tener una duración mucho mayor a la estipulada.

eliminar al enemigo o a quien potencialmente pudiera serlo.

Asimismo, y aparte de los aspectos formales, el carácter represivo de los tribunales populares se pone de manifiesto por su misma actuación a partir del carácter de los encausados y, sobre todo, las penas que les fueron aplicadas.

2. La actuación de los tribunales populares de Albacete

a. Tribunal Especial Popular

Acerca de la actividad del *Tribunal Especial Popular* de Albacete solamente se han conservado 116 expedientes, con un total de 558 procesados, de los que 60 fueron incoados por rebelión militar, con 453 procesados.

Respecto a la cuantía de los delitos de rebelión militar en sus distintos tipos, predominan los de adhesión (53%), concentrados en el segundo semestre de 1936 y principios de 1937, y auxilio a la rebelión (46%), repartidos de forma más o menos uniforme entre 1936 y 1938.

La pena más aplicada fue la de reclusión entre 30 y 12 años, con el 37% del total, mientras que las penas de muerte dictaminadas significaron el 23%, siendo escasos las absoluciones y los sobreseimientos (7%). El delito de adhesión a la rebelión fue castigado mayoritariamente con la pena de muerte, seguida a bastante distancia de la de reclusión perpetua, mientras que el de auxilio a la misma lo fue con las penas de reclusión entre 12 y 30 años y, en menor medida, la reclusión inferior a 12 años.

También hay que constatar que no sólo predominan en estos delitos los individuos pertenecientes a las clases medias albaceteñas, como ya ha sido señalado, sino que también sufrieron las penas más duras al recaer sobre ellos el mayor porcentaje, con bastante diferencia respecto al resto de los grupos sociales, de penas de muerte, reclusión perpetua y entre 12 y 30 años de privación de libertad (véase el cuadro II).

b. Jurado de Urgencia

Se han conservado un total de 158 expedientes, que afectan a 699 procesados, sobre la labor desarrollada en la provincia por el *Jurado de Urgencia*. La casi totalidad de los encausados fueron hombres (93%), tratándose en su mayoría de adultos entre 20 y 59 años de edad (61%). Respecto a su lugar de residencia, existe una dispersión por la mayoría de los municipios albaceteños, si bien la mayor parte (51%) vivía en los pueblos más grandes de la provincia, tales como la capital, Almansa, Hellín, Tobarra, La Roda, Villarrobledo y Yeste.

El análisis de la procedencia social de quienes fueron juzgados por este tribunal muestra nuevamente un predominio del sector servicios, al que pertenecía el 38,8% de los procesados, aunque se reduce la distancia respecto al sector primario, que se sitúa en el 34,4%; les siguen el sector secundario (15,5%) y los inactivos (11,4%). Por consiguiente, puede decirse que la actuación represiva del Jurado de Urgencia en la provincia, si bien también afectó en mayor medida a la clase media, se fue extendiendo a aquellos otros individuos de la sociedad que eran considerados como

enemigos potenciales del régimen al ser acusados del delito de desafección (estos datos se hallan recogidos en la primera columna del cuadro III).

En cuanto a su afiliación política, dominan los activistas de partidos de derecha, con el 62% de los individuos juzgados, principalmente de FE y de las JONS, siguiendo en importancia Acción Popular y el Partido Republicano Radical. Por su parte, la izquierda aglutina al 38% restante, destacando el sindicato socialista UGT, los partidos republicanos Izquierda Republicana y Unión Republicana, y el sindicato anarquista CNT, si bien una parte importante de sus miembros se afilió con posterioridad al fracaso de la rebelión en la provincia.

El delito de desafección³⁵ fue castigado con penas de privación de libertad entre uno y cinco años, con el 42% (generalmente acompañadas de sanciones económicas), mientras que las absoluciones y sobreseimientos, con el 25%, se sitúan en segundo lugar.

Al igual que en el Tribunal Especial Popular, las penas más duras recayeron sobre los individuos ocupados en el sector terciario, volviendo a afectar consiguientemente a los grupos sociales intermedios (véase el cuadro IV).

c. Tribunal Especial de Guardia

Por último, no resta más que hablar de la labor desarrollada en la provincia por el *Tribunal Especial de Guardia*, del que sólo se han conservado 76 expedientes de 249 individuos juzgados.

Entre los encausados, vuelven a predominar los hombres, aunque el porcentaje de mujeres aumenta, representando el 25% del total. La práctica totalidad son adultos, y más concretamente adultos viejos entre los 39 y 59 años de edad (61%). En cuanto al lugar de residencia de los mismos, lo más destacable es el importante incremento de los individuos que vivían fuera de la provincia, sobre todo en las provincias aledañas de Alicante, y más concretamente el Bajo y Medio Vinalopó, y Murcia, que representan el 43% del total de procesados por este tribunal. La mayoría de los foráneos fueron juzgados por el delito de subsistencias, lo que no hace más que confirmar el hecho de que Albacete continuó siendo durante la Guerra Civil, por su importante producción cerealícola y vinícola, zona de aprovisionamiento para el Levante peninsular.

El análisis de la procedencia social de los encausados se refiere solamente a quienes fueron juzgados por el delito de subsistencias, ya que es de los únicos que se conserva información. En este sentido, cabe señalar el predominio del sector servicios, con el 53% de los procesados, seguido del sector primario (32%), por lo que otra vez es la clase media la más afectada (hay que destacar la mayoritaria presencia de comerciantes y transportistas, lo que se explica por el mismo carácter del delito en cuestión), aunque se repite lo señalado para el Jurado de Urgencia respecto a la mayor presencia de la clase baja frente a lo que sucedía en los delitos

---

³⁵ Este delito era asimilado con la simple expresión de determinadas ideas, la adopción de determinados comportamientos o las más nimias pruebas.

de rebelión militar (véanse los datos ofrecidos en la segunda columna del cuadro III).

La práctica totalidad de los procesados por este tribunal estaban afiliados a la UGT y la CNT (no hay que olvidar que a estas alturas de la guerra ambos sindicatos disientían de la política desarrollada por el gobierno de hegemonía comunista encabezado por Negrín), si bien la mayoría de ellos se había afiliado a tales sindicatos con posterioridad al fracaso de la sublevación militar de julio de 1936; por otra parte, los informes políticosociales calificaban a muchos de estos individuos como "derechistas".

Los delitos más perseguidos por el Tribunal Especial de Guardia de Albacete fueron los de subsistencias³⁶ y el de derrotismo, que representaban el 54% y el 43% respectivamente.

Por su parte, las penas más sobresalientes, con el 55% del total, fueron las sanciones económicas, predominando las multas entre 1000 y 5000 ptas, seguidas por las absoluciones y los sobreseimientos (35%). Hay que señalar que el delito de derrotismo fue reprimido con la condena a varios años de cárcel, mientras que el de subsistencias lo fue con varios meses de privación de libertad y la aplicación de sanciones económicas, cuya cuantía estaba en función de la categoría social del condenado³⁷.

CONCLUSIONES

A lo largo de este trabajo se ha pretendido contribuir al análisis de los comportamientos políticosociales de la sociedad albaceteña en la década de 1930: el antagonismo de clases que fundamentalmente subyace tras el intento de rebelión militar de julio de 1936 y el subsiguiente enfrentamiento civil, ejemplarizado a través de un aspecto de la vida en la retaguardia a lo largo de toda la guerra como fue la Justicia Popular. Como conclusiones, señalaría:

- 1) Un progresivo deterioro de las relaciones sociales en la provincia como

---

³⁶ Como tales se calificaban el transporte de alimentos por encima de una determinada cantidad sin el permiso reglamentario, los precios abusivos, la acaparamiento y la adulteración de alimentos.

³⁷ Diversos estudios sobre la actuación de los tribunales populares en otras provincias también ofrecen conclusiones similares a las expuestas; véase SANCHEZ RECIO, G.: "Los tribunales populares y su actuación durante la Guerra Civil en el País Valenciano", en *Perspectiva Contemporánea*, I, nº 1 (oct. 1988), pp. 79-91. Por contra, otros autores sostienen la paulatina despolitización y lenidad en la actuación de los tribunales populares, como en el caso de Cartagena y Jaén: cfr. BERMEJO MERINO, C.: "El Tribunal Popular de Cartagena", en *Justicia...*, pp. 109-125 y COBO ROMERO, F.: "La justicia republicana en la provincia de Jaén durante la Guerra Civil. La actuación de los Tribunales Especiales Populares", en *ib.*, pp. 127-140. Con todo, ambas afirmaciones no son excluyentes, ya que, como señala el Prof. Sánchez Recio, no existió una actuación unitaria en los distintos tribunales populares, sino que tuvieron autonomía, pudiendo distinguirse distintos tipos de tribunales según "las circunstancias en las que los tribunales llevaron a cabo sus actuaciones y de los condicionamientos que les afectaron", inscribiéndose los de Albacete entre aquellos cuyas actuaciones fueron más duras, además de Valencia, Barcelona y Alicante (SANCHEZ RECIO, G.: *Justicia y Guerra...*, pp. 131-144).

consecuencia del agravamiento de los problemas estructurales propios de una sociedad agraria tradicional por la incidencia de la desfavorable coyuntura económica y política que caracterizó los años treinta. En este ambiente de creciente crispación social, un sector de la sociedad albaceteña apoyó el intento involucionista de julio de 1936 que protagonizó en la provincia la Guardia Civil, y cuyo objetivo inmediato era controlar las comunicaciones entre Madrid y la zona del Levante.

2) La trama civil de la rebelión, constituida por la oligarquía provincial, secundada por los grupos intermedios de la sociedad, encuadrados en FE y de las JONS tras la descomposición de la CEDA, se tradujo en un apoyo a los militares que se sublevaron en la provincia, de los que recibieron instrucciones y armas y a los que apoyaron en la toma del poder, pasando a detentarlo fundamentalmente a nivel municipal (ayuntamientos y Diputación Provincial) tras el triunfo momentáneo de la insurrección, mientras que los militares rebeldes controlaron los principales resortes del poder a nivel provincial (Comandancia Militar y Gobierno Civil).

3) Su fracaso se debió principalmente a la llegada de fuerzas leales a la República desde Alicante, Murcia y Ciudad Real, si bien también se produjo la movilización del sector más concienciado de la sociedad albaceteña que había constituido la base social del relativo pero creciente peso de la izquierda en la provincia, y que, tras fracasar la rebelión, se hizo con el poder a nivel local y provincial, desatando una violenta represión contra quienes tradicionalmente lo habían detentado en Albacete y contra aquellos que, de un modo u otro, les habían secundado.

4) La implantación y actuación de la Justicia Popular en la provincia conforme se iba afianzando el poder efectivo del gobierno central y su red de gobernadores civiles, significó la reabsorción por el Estado de la violencia que de forma espontánea e incontrolada era ejercida al margen de las autoridades legales. La actuación represiva de los tribunales que funcionaron en Albacete (el Tribunal Especial Popular, el Jurado de Urgencia y el Tribunal Especial de Guardia) afectó principalmente a las clases medias albaceteñas, representadas en mayor cuantía y castigadas con mayor dureza, aunque de forma progresiva se fue extendiendo a aquellos otros individuos del resto de la sociedad (como demuestra el progresivo incremento del número de mujeres, jóvenes y miembros de las clases bajas) que de un modo u otro disentían de las directrices marcadas desde el poder, pues tras castigar a quienes habían participado en la rebelión de julio de 1936, pasaron a perseguir a aquellos que podían ser enemigos potenciales del régimen al caer en los delitos de desafección, alta traición, espionaje, derrotismo y subsistencias, lo que tan sólo puede ser entendido por la situación de guerra y la lucha políticosocial en la zona republicana.

CUADRO II

Relación entre las sentencias dictaminadas y la ocupación profesional de los encausados por rebelión en el Tribunal Especial Popular de Albacete

PROFESION	A-S	< 12	12-30	RP	M
Jornaleros	-	17	13	4	4
Labradores	7	11	17	5	7
Prop. agr.	-	2	7	1	3
Pastores	1	1	-	-	-
Sector I	8	31	37	10	14
% del total	28	44	25	19	27
Albañiles	2	2	5	3	1
Artesanos	5	4	16	6	8
Obreros	-	1	2	-	-
Industriales	-	1	3	8	1
Sector II	7	8	26	17	10
% del total	28	11	17	14	17
Transp.	-	2	5	1	5
Comerciantes	-	9	14	2	10
Posaderos	-	-	2	-	-
Dep./empl.	4	9	17	3	8
Serv. part.	1	1	4	2	1
Prof. lib.	2	1	11	7	16
Sector III	9	27	82	17	43
% del total	36	38	54	60	49
Estudiantes	2	5	5	8	5
Jubilados	-	-	1	-	-
Inactivos	2	5	6	8	5
% del total	12	7	4	15	7

A-S: absolución, sobreseimiento; < 12: reclusión inferior a 12 años; 12-30: reclusión entre 12 y 30 años; RP: reclusión perpetua; M: muerte.

Fuente: A.H.N., Causa General de Albacete, leg. 1014/2. Elaboración propia.

CUADRO III
Ocupación profesional de los encausados en el Jurado de Urgencia (J.U.)
y el Tribunal Especial de Guardia de Albacete (T.E.G.)

PROFESION	J.U.	% DEL TOTAL	T.E.G.	% DEL TOTAL
Jornaleros	86	16,7	15	22
Labradores	64	12,4	7	10,3
Prop. agr.	15	3	-	-
Pastores	7	1,4	-	-
Leñadores	2	0,4	-	-
Canteros	2	0,4	-	-
Sector I	176	34,3	22	32,3
Albañiles	8	1,5	-	-
Artisanos	55	10,7	3	4,4
Obreros	3	0,6	2	2,9
Industriales	14	2,7	4	5,9
Sector II	80	15,5	9	13,2
Transportistas	23	4,7	9	13,2
Comerciantes	45	8,7	19	28
Posaderos	2	0,4	-	-
Dep./empl.	45	8,7	5	7,3
Funcionarios	40	7,8	1	1,5
Serv. part.	14	2,7	1	1,5
Prof. lib.	30	5,8	1	1,5
Sector III	199	38,8	36	53
Sus labores	18	3,5	1	1,5
Estudiantes	13	2,5	-	-
Sacerd./relig.	16	3,1	-	-
Jubilados	12	2,3	-	-
Inactivos	59	11,4	1	1
TOTAL	514	100	68	100

Fuente: A.H.N., Causa General de Albacete, legs. 798/1, 1018-1022/1. Elaboración propia.

CUADRO IV
Relación entre las penas aplicadas y el oficio de los procesados
por el Jurado de Urgencia de Albacete

PROFESION	MULTA	A-S	V	< 1	1-5	> 5
Jornaleros	12	24	6	6	26	5
Labradores	24	18	11	-	26	1
Prop. agr.	10	-	1	2	6	1
Leñadores	1	-	-	-	1	-
Canteros	1	-	-	-	2	-
Sector I	48	45	18	8	64	7
% del total	29	46	26	24	33	32
Albaniles	2	-	-	-	2	-
Artesanos	13	7	-	3	29	2
Obreros	2	-	-	-	3	-
Industriales	6	3	3	1	2	-
Sector II	23	10	7	4	36	2
% del total	14	10	10	12	18	9
Transp.	2	5	3	5	7	-
Comerciantes	21	7	10	3	16	1
Posaderos	2	-	-	-	1	-
Dep./empl.	12	4	4	2	23	4
Funcionarios	16	5	10	1	20	3
Serv. part.	3	6	2	1	2	1
Prof. lib.	16	5	6	1	9	-
Sector III	72	32	35	13	78	9
% del total	44	33	51	40	40	41
Sus labores	7	7	-	7	4	1
Estudiantes	10	2	-	-	8	-
Sac./rel.	2	2	2	1	3	-
Jubilados	2	-	7	-	2	-
Inactivos	21	11	9	8	17	3
% del total	13	11	13	24	9	18

MULTA: sanciones económicas de diversa cuantía; A-S: Absolución, sobreseimiento; V: libertad restringida; < 1: reclusión inferior a 1 a ño; 1-5: reclusión entre 1 y 5 años; > 5: reclusión superior a 5 años.
Fuente: A.H.N., Causa General de Albacete, legs. 1018-1022/1. Elaboración propia.